

**SEÑOR
JUEZ DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E. S. D.**



REF. ACCION DE TUTELA

**ACCIONANTES: RONALD JOSE VALDES PADILLA-OSCAR ALBERTO LENIS
IBARGUEN.**

ACCIONADO: MINISTERIO DEL INTERIOR Y REGISTRADURIA.

RONALD JOSE VALDES PADILLA Y OSCAR ALBERTO LENIS IBARGUEN, mayores, delegados ante el Espacio Nacional de Consulta Previa e identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, acudimos a su despacho de manera comedida para instaurar Acción de Tutela, contra el Ministerio del Interior representado por el señor **DANIEL PALACIOS MARTINEZ** o quien haga sus veces al momento de la notificación, con el objetivo que tutele el derecho fundamental a la consulta previa vulnerado por la entidad señalada como se demuestra con los siguientes hechos:

I. HECHOS:

PRIMERO: El Señor DANIEL PALACIOS MARTINEZ en su calidad de Ministerio del Interior expidió la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 disponiendo que los Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales adelanten el procedimiento para llevar a cabo la elección del representante de cada una de las comunidades étnicas presentes ante los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Dicha Circular, señala igualmente que las entidades territoriales generen o faciliten “los espacios de concertación para que las comunidades elijan a los representantes en mención”.

SEGUNDO: La citada Circular, desconoce abiertamente el proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2012 al analizar la constitucionalidad del artículo 42 de la Ley 1622 de 2012.

El alto tribunal constitucional no ordeno espacios de concertación, dispuso que en cada municipio la elección del representante de cada comunidad étnica fuera el resultado de un proceso de consulta previa con las instituciones representativa-s en nuestro caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras- , veamos:

“...Por el contrario, si se interpreta que la norma únicamente crea un espacio de representación para las comunidades étnicas, sin establecer el proceso para nombrar el representante de las mismas que, por consiguiente, deberá ser fruto de

un proceso de consulta previa con cada una de las comunidades que vaya a ser representada en el municipio, se estará ante una norma que atiende las exigencias del parámetro de constitucionalidad, que en este caso, además de la Constitución, se integra por el artículo 6º del convenio 169 de 1989 de la OIT. Siendo estas las posibilidades interpretativas, y siguiendo el principio de interpretación conforme a la Constitución –artículo 4º de la Constitución-, la Sala declarará la exequibilidad del párrafo primero, en el entendido que dicho precepto exige que la elección del representante de cada comunidad étnica minoritaria sea fruto de un proceso en el que la consulta previa a dicha comunidad haya sido uno de los pasos seguidos por el respectivo municipio.” (El subrayado fuera de texto). (Sent. C-862, 2012).

TERCERO: Al declarar la exequibilidad del artículo 42 de la Ley 1622 de 2012, la Corte Constitucional en consonancia con lo expuesto en la parte motiva dispuso:

“**Décimo.** - Declarar **EXEQUIBLE** el artículo 42 del proyecto de ley objeto de revisión, en el entendido que el proceso de elección previsto en el Parágrafo 1º implica la realización de la consulta previa con las comunidades que vayan a ser representadas por el miembro del Consejo de Juventud que se quiera elegir.” (El subrayado fuera de texto).

CUARTO: La CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021, solo busca evadir la realización del proceso de consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que deben ser representadas en los consejos municipales y locales de juventud desatendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-862 de 2012 y en clara violación del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

QUINTO: Mediante una Circular el Ministerio del Interior, no puede eludir el desarrollo del proceso de consulta previa que de conformidad con la jurisprudencia constitucional debe adelantarse observando el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, la garantía de procedimientos apropiados, con las instituciones representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con buena fe, de una forma adecuada a las circunstancias y con el fin de alcanzar a un acuerdo sobre la representación en los consejos municipales y locales de juventud.

SEXTO: El deber de consulta para la representación en los consejos municipales y locales de juventud de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es un mandato que emana de los artículos 1, 2, 93 y 94 de la Constitución, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Sentencia C-862 de 2012 pero inexplicablemente el Ministerio del Interior optó por evadirlo expidiendo una Circular abiertamente inconstitucional puesto que la misma tampoco fue objeto de consulta previa.

II. DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO



En el presente caso, la expedición de la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 por parte del Ministerio del Interior crea una afectación directa susceptible del amparo constitucional.

La vulneración del derecho a la consulta previa a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se configuro en la medida en que el Ministerio del Interior desconociendo las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2012 expidió la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 para eludir la realización de la consulta previa con las instituciones representativas para acordar la representación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los consejos municipales y locales de juventud.

En lo que respecta la afectación directa como requisito para determinar la procedencia de la consulta previa, la Corte Constitucional ha señalado:

“De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de esta Corte, el ámbito material de aplicación de la consulta no se ciñe a determinados supuestos hipotéticos. Si bien los eventos explícitamente mencionados en la Constitución Política y los documentos relevantes del DIDH deben considerarse relevantes, estos no agotan la obligación estatal, pero el concepto clave para analizar la procedencia de la consulta previa es el de **afectación directa**.

Esta expresión, por supuesto, es amplia e indeterminada, lo que puede ocasionar distintas disputas interpretativas. Sin embargo, actualmente, la Corte ha desarrollado un conjunto de estándares que permiten evaluar al operador jurídico, si una medida, norma o proyecto afecta directamente a los pueblos indígenas: (i) la afectación directa hace alusión a la intervención que una medida (política, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (ii) el hecho de que la medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y (iii) la imposición de cargas o atribución de beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición jurídica; (iv) la interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido; y (v) se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente diferenciados[225].”¹

¹ Sentencia C-389-16

En la Sentencia T-063 de 2019 sobre la procedencia de la consulta previa más allá de si la afectación es positiva o negativa, la Corte Constitucional señaló:

“ 10.2.3. La consulta previa procede ante afectación directa, sea positiva o negativa

Siguiendo lo anterior, para determinar la exigencia de la consulta previa se requiere necesariamente que exista una afectación directa, sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de las Salas de Revisión y de la Sala Plena de esta Corporación, el hecho de que ese impacto sea positivo o negativo no constituye el núcleo esencial de este derecho. Este asunto, de hecho debe ser definido en el proceso de la consulta, en el cual se puede, por ejemplo realizar modificaciones respecto de las medidas^[130].

De esta manera, la Sentencia C-030 de 2008, en la que se declaró inexecutable la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal” ante la omisión de consulta previa, esta Corporación señaló que ese cuerpo jurídico afectaba directamente a los pueblos indígenas y tribales y, por tanto lo declaró inexecutable por la ausencia de consulta previa. Se advirtió que “procede la consulta, cuando la ley contenga disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal **efecto sea positivo o negativo**, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta.” (Negrillas de la Corte).

Al respecto, en la Sentencia C-461 de 2008 se indicó que: “Una lectura detenida de las distintas disposiciones contenidas en la Ley 1151 de 2007 revela que (...) (E)n efecto, varios proyectos y programas incluidos dentro del Plan Nacional de Inversiones, o resaltados por su importancia dentro de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, incidirán directa y específicamente sobre distintos grupos del país – **independientemente de si su impacto será benéfico o perjudicial, cuestión cuya determinación atañe a las comunidades étnicas –indígenas o afrodescendientes- potencialmente afectadas en ejercicio de su autonomía y sus derechos colectivos**”. Consideraciones bajo las cuales concluyó que “sí existe una obligación estatal específica de realizar consulta previa”.

En igual sentido, la Sentencia T-769 de 2009 señaló que independientemente de si el impacto directo de las comunidades resulta positivo o negativo, cuando implique una afectación directa, debe ser consultada. En esa línea se explicó que se garantiza la participación y el acceso a la información de tal manera que se identifiquen, en ese proceso, si existen afectaciones beneficiosas o dañinas.



Puntualmente, “esta especial protección implica un proceso mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades respectivas y a las comunidades implicadas, directamente la participación y el acceso a la información sobre un programa o plan que se pretenda realizar en su territorio, buscando que participativamente sean identificados los impactos positivos o negativos del proyecto o programa respectivo, buscando salvaguardar la idiosincrasia de los pueblos indígenas y tribales que habitan el país”.

Igualmente, en la Sentencia C-702 de 2010 se determinó que la consulta previa debe realizarse independientemente de si la afectación es negativa o positiva, asunto que no le corresponde resolver a la Corte, pues el problema jurídico se concentra en determinar si se exigía o no este mecanismo de participación: “sin considerar si las nuevas reglas afectan positiva o negativamente a dichas minorías, asunto de conveniencia que no es de la incumbencia de esta Corporación, la Sala detecta que la norma superior cuyo trámite de adopción ahora examina sí afecta en forma directa a las comunidades étnicas, por lo cual ha debido ser sometida a consulta previa, en las condiciones explicadas por la jurisprudencia de esta Corporación antes expuestas.”

En esa misma línea, en las consideraciones de la Sentencia C-293 de 2012 se señaló que “a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalado que hay “afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta.”

En el presente caso, el Ministerio del Interior no tenía competencia para dejar sin efecto mediante Circular la orden de realizar consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras impartida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2012 o para desconocer el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

Sobre este aspecto, vale la pena traer a colación lo expuesto por alto tribunal constitucional:

“Las prerrogativas del Convenio 169 de la OIT se materializan a través de un trámite consultivo que debe ser anterior a la adopción de cualquier medida que afecte directamente a los pueblos étnicos. Sin surtirlo se estarían viciando los actos expedidos con ocasión de esos procesos. En otros términos, el derecho a la

consulta previa exige “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como lo establece el artículo 6º de la disposición en comento[39].”²



EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA NO SE PUEDE SUSTITUIR POR ESPACIOS DE CONCERTACIÓN.

Mediante la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021, el Ministerio del Interior exhorta a Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales a que sustituyan el procedimiento de consulta con espacios de concertación en flagrante desconocimiento de lo señalado por la Corte Constitucional sobre el trámite que debe surtir la consulta previa:

“Como se observa, la consulta previa es un trámite particular, de naturaleza constitucional, exigible de aquellas políticas que, en razón de su contenido o implicaciones, interfieran directamente con los intereses de las comunidades diferenciadas. Por ende, su exigibilidad se basa en la presencia de medidas legislativas o administrativas de esa índole y, en consecuencia, no resulta admisible que su omisión sea avalada con la existencia de mecanismos ordinarios y generales de participación política de las comunidades tradicionales...”³

De lo anterior, es fácil colegir que los espacios de concertación que Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales adelanten o hayan adelantado enmarcados en la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 no agotan el cumplimiento de la Consulta Previa ordenada en la Sentencia C-862 de 2012.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2012 no excepciono o estableció que concertaciones podían sustituir la consulta previa, por el contrario, tanto en la parte motiva como en la resolutive de la providencia ordeno la realización de consulta previa con las instituciones representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la representación en los consejos municipales y locales de juventud.

Lo expuesto, demuestra la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa por parte del Ministerio del Interior con la expedición de la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 y la procedencia de la tutela en el marco establecido por la Corte Constitucional.

² Sentencia T-197-16

³ Sentencia C-175 de 2009

III. LA TUTELA COMO MECANISMO IDÓNEO FRENTE A LA CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 DE AGOSTO 10 DE 2021.



Ante la expedición de la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021, acudimos al amparo constitucional teniendo en cuenta que no existe en el ordenamiento jurídico otro mecanismo idóneo para demandar la protección del derecho fundamental a la consulta previa tal como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-197 de 2016:

“A este respecto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en casos como el analizado los medios de defensa ante la jurisdicción contenciosa no son idóneos. Esto debido a que solo pueden resolver aspectos relativos a la legalidad de la decisión administrativa, más no están en capacidad de resolver temas relacionados con la omisión del procedimiento de consulta previa, propios del juez constitucional.

-

En ese sentido, la Corte ha puesto de presente en casos similares al que ahora ocupa a la Sala que “ante controversias relativas al amparo del derecho a la consulta previa en las que se plantee la necesidad de que los accionantes agoten otros mecanismos ordinarios de defensa, el juez constitucional deba considerar i) el carácter de derecho fundamental que se le reconoce a la consulta previa, ii) que es él el funcionario responsable de asegurar el ejercicio eficaz de esa categoría de derechos y que iii) las condiciones especiales de vulnerabilidad que suelen enfrentar las comunidades indígenas y tribales justifica que sea esta vía excepcional el escenario idóneo para evitar la lesión de sus derechos.”[86]” (El subrayado fuera de texto).

IV. CARÁCTER DE DERECHO FUNDAMENTAL DE LA CONSULTA PREVIA

La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha demostrado el carácter de derecho fundamental que tiene la consulta previa, por lo que es oportuno citar lo expuesto en las Sentencias C-389 de 2016, T-002 de 2017 y C-017 de 2017 y T-151 de 2019:

Sentencia C-389 de 2016.

“Como se explicó, el Convenio 169 de 1989, instrumento que por primera vez habló de la Consulta previa, tiene como ejes la autonomía de los pueblos, el respeto por la diferencia cultural y la defensa de los territorios, elementos que permean todo su articulado y se convierten en las herramientas centrales para su interpretación. En ese marco, la consulta previa no constituye una garantía aislada, sino un elemento

transversal al Convenio, en tanto condición de eficacia de su derecho a adoptar decisiones autónomas sobre su destino, sus prioridades sociales, económicas y culturales[208].

“En el ámbito interno, la Corporación ha sostenido de manera constante que la consulta previa posee el carácter de derecho fundamental[209]. En el fallo de unificación SU-039 de 1997, la Corte precisó que la consulta es un derecho fundamental porque concreta mandatos constitucionales, como el principio de participación de grupos particularmente vulnerables, la diversidad cultural y los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, frente a los pueblos étnica o culturalmente diversos[210].”

T-002 de 2017

“3. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA EN EL ORDENAMIENTO

La Constitución Política de 1991 otorgó un reconocimiento especial para los pueblos indígenas y tribales, quienes desde la época colonial hasta nuestros días continúan siendo grupos altamente discriminados y marginados respecto del conjunto mayoritario de individuos de la misma sociedad.

Considerando que el Estado colombiano se representa en una República democrática, **participativa** y **pluralista** (C.P. art. 1), que admite la **diversidad étnica y cultural** como un valor constitucional de la nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70), las comunidades étnicas minoritarias gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales.

“...la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo propias de tales grupos, que en la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Este hecho refuerza la necesidad de protección especial por parte del Estado, en defensa de la multiculturalidad y las minorías”[8].

La consulta previa encuentra sustento en el artículo 1º de la Constitución Política, que enmarca a Colombia en un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, así como en el artículo 2º que establece como uno de los fines del Estado el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa de la Nación.



No obstante, la trascendencia constitucional del derecho a la consulta previa emana del Convenio 169 de la OIT, aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 21 de 1991 “Por la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, pues vía bloque de constitucionalidad, en sentido estricto, pasó a ser un mecanismo directo de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales y una fuente obligatoria de derecho constitucional.

Respecto a este Convenio y el bloque de constitucionalidad, ha reiterado la Corte Constitucional:

“... el Convenio 169 de la OIT , y concretamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa conforma con la Carta Política bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del ordenamiento constitucional, no sólo porque el instrumento que la contiene proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos laborales de dichos pueblos - artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursos naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación del derecho de éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como comunidades reconocibles – artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y tribales”**[9]**.

De acuerdo al anterior pronunciamiento, se entiende que el contenido del Convenio 169 de la OIT adquiere una jerarquía normativa propia y un parámetro de control de constitucionalidad determinante en el ordenamiento jurídico colombiano, en tanto implica su obligatorio acatamiento por parte de las entidades públicas y privadas que pretendan menoscabar las diversas cosmogonías indígenas o tribales de la Nación colombiana.

Así, la consulta previa constituye uno de los principales instrumentos internacionales para hacer frente a la discriminación y promover la dignidad, subsistencia y supervivencia de las comunidades étnicas. En concreto, este derecho exalta principios constitucionales axiales como la diversidad cultural y el pluralismo étnico, resaltando el poder de los pueblos indígenas para asumir el autocontrol de sus instituciones, formas de vida, desarrollo económico, identidad, lengua y creencias.

El establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y tribales sobre las cuestiones que les conciernen directamente[10] es la piedra angular del Convenio No. 169 de la OIT, lo que implica la participación efectiva de estos en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e integridad[11].

Según la Corte Constitucional, la consulta previa, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades minoritarias y asegurar la subsistencia de grupos sociales genuinos. Por consiguiente, la participación democrática de las comunidades étnicas minoritarias no se reduce a una simple intervención estatal dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con cierta autorización o habilitación legal o reglamentaria, sino que tiene una significación mayor debido a los altos intereses multiculturales que se procuran proteger, relacionados con la definición del destino, la integridad y la subsistencia de los pueblos indígenas o tribales[12].”

“Ahora bien, en relación con la procedencia de la acción de tutela por vulneración del derecho fundamental a la consulta previa, ésta Corporación en Sentencia **SU-383 de 2003** precisó que: “no existe en el ordenamiento un mecanismo distinto a la acción de tutela para que los pueblos indígenas y tribales reclamen ante los jueces la protección inmediata de su derecho a ser consultados, a fin de asegurar su derecho a subsistir en la diferencia, por consiguiente compete al Juez de Tutela emitir las ordenes tendientes a asegurar su supervivencia, en los términos del artículo 86 de la Carta”. (El subrayado fuera de texto)

En Sentencia **T-576 de 2014**, se resaltaron los argumentos expuestos de la siguiente manera: “...Los medios de defensa ante la jurisdicción contenciosa no son idóneos. Esto debido a que solo pueden resolver aspectos relativos a la legalidad de la decisión administrativa, más no está en capacidad de resolver temas relacionados con la omisión del procedimiento de consulta previa. En ese sentido, la Corte ha puesto de presente en casos similares al que ahora ocupa a la Sala que ante controversias relativas al amparo del derecho a la consulta previa en las que se plantee la necesidad de que los accionantes agoten otros mecanismos ordinarios de defensa, el juez constitucional deba considerar i) el carácter de derecho fundamental que se le reconoce a la consulta previa, ii) que es él el funcionario responsable de asegurar el ejercicio eficaz de esa categoría de derechos y que iii) las condiciones especiales de vulnerabilidad que suelen enfrentar las comunidades indígenas y tribales justifica que sea esta vía excepcional el escenario idóneo para evitar la lesión de sus derechos” (el subrayado fuera de texto)

“14. Uno de los derechos consustanciales y más relevantes de las comunidades étnicamente diferenciadas es la consulta previa. La fuente de esta prerrogativa se encuentra, por un lado, en los artículos 2, 40 y 330 de la Constitución Política, a partir de los cuales se ha construido la existencia de un derecho calificado de participación de las comunidades frente a la extracción de recursos de sus territorios. Por otro lado, su consideración y exigibilidad se deriva de los artículos 6º y 7º del Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en los cuales se establece el derecho de los pueblos a ser consultados frente a toda medida administrativa o legislativa susceptible de afectarlos directamente^[45].”

“La consulta previa es, entonces, un medio en cabeza de las comunidades étnicas para definir sus prioridades de vida y desarrollo y así llevarlas al diálogo intercultural con la sociedad mayoritaria, siempre bajo los supuestos de igualdad de culturas (Art. 70 C.P.) y buena fe (Art. 83 C.P.)^[47]. Debe subrayarse que la concertación y el diálogo entre la sociedad mayoritaria y las comunidades étnicas se encuentran destinados no sólo a incorporar su conocimiento en las decisiones públicas, sino también a la protección de todos sus derechos. Por ello, la consulta previa es un derecho autónomo y, a la vez, una herramienta de protección de los demás derechos e intereses de sus titulares.”

Sentencia T-151 de 2019.

“27. Por otra parte, en relación con la regulación interna de esta garantía, la Corte Constitucional ha explicado de forma abundante las obligaciones que se derivan del establecimiento de esa herramienta. Así, por ejemplo, precisó que la consulta previa es un derecho fundamental, en tanto garantiza la participación de un colectivo que ha sido históricamente discriminado y, además, asegura la protección de la cultura nacional^[54]. Adicionalmente, puntualizó que la consulta debe ser flexible, en tanto resulta preciso que se adecúe a las necesidades y particularidades de cada caso^[55].”

V. PETICIONES

Por los hechos expuestos, Señor Juez solicitamos a su despacho:

Tutelar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y como consecuencia de ello:

1. Ordenar al Ministerio del Interior, Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales inaplicar por inconstitucionalidad la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 hasta que se realice el procedimiento de consulta previa con la participación de las

instituciones representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que vayan a ser representadas en los consejos municipales y locales de juventud.

2. Ordenar al Ministerio del Interior, Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales proceder a convocar a las instituciones representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que vayan a ser representadas en los consejos municipales y locales de juventud, con el objeto de desarrollar el proceso de Consulta Previa en los términos dispuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2012 y el Convenio 169 de la OIT.
3. Ordenar a Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales suspender las acciones, actividades y actos enmarcados en lo dispuesto en la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Impetramos la presente Acción de Tutela, con base en los artículos 1, 2, 40, 86, 93 y 94 de la Constitución, el artículo 6º Convenio 169 de la OIT, los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017, la Sentencia C-862 de 2012 y demás jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de consulta previa.

VII. PRUEBAS

Con la presente Acción de Tutela, allegamos como prueba de los hechos señalados:

- Copia simple de la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021.
- Copia simple de certificación de la calidad delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa de los suscritos.

VIII. SOLICITUDES DE VINCULACIÓN.

Con el debido respeto, solicitamos se vincule a la presente Acción de Tutela a:

-La Procuraduría General de la Nación.

-La Defensoría del Pueblo.

-Por conducto del Ministerio del Interior a Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales del País.

IX. ANEXOS

Nos permitimos anexar:

- Copia de los documentos aducidos como prueba en cinco (5) folios.

X. JURAMENTO

Declaramos bajo la gravedad del juramento no haber presentado Tutela por violación del derecho fundamental a la consulta previa por la expedición de la CIRCULAR EXTERNA OFI2021-22915-DMI-1000 de agosto 10 de 2021 ante ningún despacho judicial de la Republica.

XI. NOTIFICACIONES

-El Ministerio del Interior, puede ser notificado en el siguiente correo electrónico: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

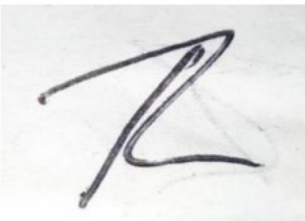
-La Procuraduría General de la Nación, puede ser notificada en el siguiente correo electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

-La Defensoría del Pueblo, puede ser notificada en el siguiente correo electrónico: juridica@defensoria.gov.co

- Los Gobernadores, Alcaldes Municipales, Distritales y Locales del País, pueden ser ubicados por conducto del Ministerio del Interior.

-Los suscritos, recibimos notificaciones en los Correos Electrónicos: sumatearonald@gmail.com, lenisoscar@gmail.com

Atentamente,



RONALD JOSE VALDES PADILLA
CC. No. 72008556



OSCAR ALBERTO LENIS IBARGUEN
C.C. 1.113.625.600